PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Pamela Susana VELÁZQUEZ ZAMBRANO*

SUMARIO: Introducción; I. El sistema integral de justicia penal para adolescentes en México; II. La perspectiva de género; III. La obligación de aplicar la perspectiva de género en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; IV. La aplicación de la perspectiva de género en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; Conclusión; Fuentes consultadas.

Resumen

El Instituto de Justicia Procesal Penal desde 2016 comenzó a trabajar en la implementación de la *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes*, trabajando con la creación de la red “Libertad en Comunidad” y el Observatorio Libertad en Comunidad. En específico, el Observatorio tiene el fin de dar seguimiento a la promoción y aplicación de la Ley Nacional por parte de las autoridades que intervienen en el sistema integral, esto con perspectiva de género debido a que el porcentaje de las mujeres dentro del sistema penal de justicia para adolescentes es mínimo, por lo consecuente, generalmente se invisibilizan las realidades y necesidades de las mujeres adolescentes inmersas en el sistema.

El presente artículo busca ilustrar los objetivos del sistema integral de justicia penal para adolescentes y de la perspectiva de género para finalmente proponer una aplicación de la perspectiva de género en el sistema integral de justicia penal para adolescentes con base en la información que demuestran los avances y retos de esta información, la cual fue recopilada por el Observatorio Libertad en Comunidad.

Introducción

La aplicación de la perspectiva de género en el actuar de las autoridades es una obligación que deviene de la Constitución mexicana y de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, bajo el argumento de que

---

* Licenciada en *Derecho* por la Universidad Iberoamericana de Derechos Humanos. Ha colaborado con el Observatorio de Violencia Social y Género en Puebla, fue becaria Jorge Carpizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es investigadora en el Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. y miembro del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Contacto: pamela_velazquez@presunciondeinocencia.org.mx

vivimos en una sociedad que, como diría Silvia FEDERECCI, ha sido fundada en un estado patriarcal y el derecho penal no es la excepción.

En México nos encontramos ante la implementación de la *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes*, mismo que tiene como objetivo proteger los derechos de las personas adolescentes que tienen contacto con este sistema de justicia penal. Si bien es cierto, la mayoría de los adolescentes en el sistema son hombres, también es cierto que el reducido número de mujeres en el sistema —de las cuales no existen cifras concretas— pueden llegar a sufrir discriminación por razones de género en su omitir al tomar decisiones de políticas públicas, estadística o al momento de tomar decisiones judiciales.

Por lo anterior, es importante que las autoridades del sistema analicen la discriminación que históricamente hemos vivido las mujeres —sin victimizarnos, en cambio reconociéndola y afrontándola— y si esta se ha trasladado al sistema de justicia para adolescentes, y en caso de este supuesto ser positivo: cómo afrontar dicha problemática con perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

«En México comenzó la implementación la doctrina de la protección integral de las personas adolescentes en 2005, con una reforma constitucional que ordenó a los Estados de la Federación la creación de un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de 12 hasta 18 años a quienes se les atribuya una conducta considerada delito. Posteriormente, en 2016 se promulgó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIIPA) cuyo objetivo es garantizar los derechos humanos de los y las adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de un delito».

I. El sistema integral de justicia penal para adolescentes en México

En México comenzó la implementación la doctrina de la protección integral de las personas adolescentes en 2005, con una reforma constitucional que ordenó a los Estados de la Federación la creación de un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de 12 hasta 18 años a quienes se les atribuya una conducta considerada delito¹. Posteriormente, en 2016 se promulgó la *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes* (LNSIIPA) cuyo objetivo es garantizar los derechos humanos de los y las adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de un delito².

Lo anterior, con fundamento en el *corpus juris* internacional —especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño— el cual señala que, a las personas adolescentes se les

debe brindar una atención integral con corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y la familia³, desde la primicia que los y las adolescentes son sujetos de derechos y protección.

Además, este sistema debe ser excepcional y especializado en justicia juvenil con el fin de garantizar sus derechos fundamentales y brindarles la protección especial que merecen por su edad y etapa en desarrollo⁴. También, el sistema y su normativa debe ajustarse rigurosamente al interés superior del niño, el cual se funda en la dignidad, las características propias de las niñas y los niños⁵, y la necesidad de propiciar el pleno desarrollo de sus potencialidades⁶.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros contra Argentina ha señalado que los y las adolescentes gozan de los mismos derechos que los

---

¹ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), *Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2017*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía — INEGI, México 2018, p. 1.

² Artículo 2, *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes*.

³ HUERTAS DÍAZ, Omar, MORALES CHINOME, Iván Ricardo, «El sistema de responsabilidad penal para adolescentes: la expansión de la punibilidad en el neopunitivismo colombiano», Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, *Revista*

Científica Guillermo de Ockham, (Julio-Diciembre 2013), disponible en: [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105329737005>], consultada en: 2019-04-15.

⁴ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas*, Estados Unidos de América 2011, pp. 3-4.

⁵ Debe entenderse como niño y niña toda persona menor de 18 años.

⁶ CORTE IDH, Caso Furlan y familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246.

adultos durante el proceso penal; no obstante, las y los adolescentes los ejercen de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Por lo tanto, las condiciones en las que participan los y las adolescentes en un proceso penal no son las mismas que los adultos por lo que es necesario que exista un trato diferenciado, lo cual justifica la existencia de un sistema penal exclusivo para adolescentes⁷.

Dicho sistema especializado, no solo debe respetar el debido proceso con un adecuado trato diferenciado, también debe de utilizar como *ultima ratio* la medida privativa de la libertad de manera preventiva o como medida sancionadora⁸ debido a que su derecho a la libertad personal no puede deslindarse del interés superior del niño y su condición de vulnerabilidad⁹.

Con base en lo anterior, la *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes* se basa en los principios de excepcionalidad, especialización, interés superior de la niñez, igualdad y no discriminación, integralidad del sistema,

interdependencia e indivisibilidad de los derechos de las personas adolescentes, mínima intervención del sistema, justicia restaurativa, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros¹⁰.

Por otro lado, esta Ley no solo contiene los derechos de las y los adolescentes, el procedimiento a seguir cuando se investiga a estos por un hecho considerado un delito y lo referente a la ejecución de las penas. También contiene apartados relacionados con la prevención social de la violencia y de la delincuencia juvenil, las cuales son el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan¹¹.

Si bien, este sistema exige que los y las adolescentes sean puestos a disposición del Ministerio Público inmediatamente, prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes o que cuenten con una

---

⁷ CORTE IDH, Caso Mendoza y otros vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 14 de mayo de 2013, Serie C No. 260.

⁸ Artículo 37.b), *Convención sobre los Derechos del Niño*.

⁹ CORTE IDH, Caso «Instituto de Reeduación del Menor» vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr.228.

¹⁰ Capítulo I, *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes*.

¹¹ Artículo 250, *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes*.

defensa especializada en el sistema integral de justicia para adolescentes y el sistema penal acusatorio; lo cierto es que la realidad de este sistema es muy distinta.

«... la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se basa en los principios de excepcionalidad, especialización, interés superior de la niñez, igualdad y no discriminación, integralidad del sistema, interdependencia e indivisibilidad de los derechos de las personas adolescentes, mínima intervención del sistema, justicia restaurativa, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros».

Según la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal de 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual fue realizada a 3308 adolescentes, se documentó lo siguiente:

i) 7.4% de las personas adolescentes detenidas tardaron más de 48 horas en ser puestas bajo la responsabilidad del ministerio público o un/a jueza penal;

ii) Si bien el 62.6% declaró ante el ministerio público, de este porcentaje solo el 54.9% lo hizo en presencia de sus padres o una persona de confianza, mientras que el 27.2% de las y los adolescentes fueron presionados para cambiar su versión;

iii) El 50.2% de las personas adolescentes sufrió violencia física durante su detención (golpes, descargas eléctricas, violencia sexual, quemaduras, entre otros). La autoridad que realizó el mayor número de detenciones fueron las policías municipales;

iv) El 68.8% de las y los adolescentes detenidos sufrió violencia psicológica (insultos, aislamiento, desnudamiento forzado...), y

v) El 31.3% fue víctima de un delito en el centro de internamiento (robo, lesiones, extorsión, delitos sexuales...)¹².

---

¹² INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, *Comunicado de*

prensa núm. 398/2018: Resultados de la primera encuesta nacional de adolescentes en

II. La perspectiva de género

Ahora bien, como se mencionó anteriormente las personas adolescentes son sujetos de protección especial debido a su condición de vulnerabilidad por encontrarse en el desarrollo de su autonomía, así como madurez física, psicológica y emocional. Sin embargo, se debe de considerar que existen personas adolescentes que se podrían encontrar en más de una condición de vulnerabilidad, es decir pertenecer a aquellas personas que por ciertas situaciones históricamente han sido discriminadas y como consecuencia se les han negado sus derechos por la estructuración de desigualdades sociales; por ejemplo: las personas indígenas, las personas con discapacidad o las mujeres.

Para entender la perspectiva de género existen dos conceptos esenciales: el sexo y el género. El primero son peculiaridades biológicas que caracterizan los individuos históricamente y erróneamente dividiéndolos meramente entre masculinos y femenino; el segundo se entiende por género la construcción

psicológica, social y cultural de las atribuciones consideradas femeninas y masculinas que se atribuyen a las personas pertenecientes de cada sexo.

Los roles de género se refieren a las conductas socialmente aceptables a los hombres y las mujeres¹³ los cuales generan estereotipos de género que son una visión generalizada sobre las características de un grupo en particular impuestos por la sociedad¹⁴; por ejemplo: las mujeres son delicadas y los hombres son bruscos o las mujeres son pacíficas y los hombres beligerantes.

Estos tienen como consecuencia la creación de relaciones de poder del rol masculino lo cual ha creado a través de la historia un modelo de sociedad patriarcal donde la mujer ha sido desvalorizada sobre el hombre¹⁵. Además, los roles de género también afectan a los hombres, pues las características que se les tienen asignadas les impiden cualquier expresión de identidad que no se ajuste a estos roles¹⁶; por ejemplo, considerar que el hombre siempre debe de ser el proveedor de la familia

---

el sistema de justicia penal, 30 de agosto de 2018, México 2018.

¹³ BECERRA, Antonio, *Transexualidad: La Búsqueda de una Identidad*, Ediciones Díaz de Santos, España 2003, p. 270.

¹⁴ COOK, Rebecca y CUSAK, Simone, *Estereotipos de género: perspectivas legales transnacionales*, Universidad de

Pennsylvania, Estados Unidos de América 2009, p. 140.

¹⁵ BERGA, Anna, «Los estudios sobre la juventud y la perspectiva de género», *Revista sobre los Estudios de la Juventud*, número 110, España 2015, p. 195.

¹⁶ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *Protocolo para juzgar con perspectiva de género*, México 2015, p. 68.

o que es una persona con fuerza física por el siempre hecho de ser hombre.

Los estereotipos no siempre tienen efectos negativos en las personas, se considera que causan prejuicios cuando se imponen para negarle a las personas un beneficio. Además, cuando esta distinción niega o restringe derechos de manera injustificada se configura una discriminación¹⁷.

La perspectiva de género es una herramienta que busca deconstruir la dicotomía basada en los cuerpos de las personas a través de i) entender que las funciones de género no son naturales, en cambio son una construcción cultural; ii) detectar creencias que erróneamente promueven estereotipos de género en normas, políticas públicas, decisiones judiciales y las decisiones gubernamentales; iii) identificar cuando debido a los estereotipos de género las personas se encuentran en desventaja respecto del acceso de oportunidades y goce de sus derechos; iv) visualizar las relaciones asimétricas de poder fundadas en estereotipos de género; v) reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de identidad: edad, orientación sexual, situación económica, o discapacidad; y vi) reconocer las situaciones en las que es

necesario dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad en las que se encuentra por razones de género¹⁸.

«La perspectiva de género es una herramienta que busca deconstruir la dicotomía basada en los cuerpos de las personas a través de i) entender que las funciones de género no son naturales, en cambio son una construcción cultural; ii) detectar creencias que erróneamente promueven estereotipos de género en normas, políticas públicas, decisiones judiciales y las decisiones gubernamentales; iii) identificar cuando debido a los estereotipos de género las personas se encuentran en desventaja respecto del acceso de oportunidades y goce de sus derechos; iv) visualizar las relaciones asimétricas de poder fundadas en estereotipos de género; v) reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de identidad: edad, orientación sexual, situación económica, o discapacidad; y vi) reconocer las situaciones en las que es necesario dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad en las que se encuentra por razones de género...».

---

¹⁷ FUENTES, Dalia, *Metodología para el Análisis de las decisiones jurisdiccionales*

desde la perspectiva de género, Equis: Justicia para las mujeres, México 2017, p. 10.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 11-12.

III. La obligación de aplicar la perspectiva de género en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Con base en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, se obliga al Estado a que toda acción u omisión por parte del este sea tomada con perspectiva de género, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas a través de la identificación de sus diferencias y su reconocimiento, evitando así que estas diferencias se conviertan en obstáculos¹⁹.

Esta obligación se transfiere al Sistema Penal Acusatorio y al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con base en los artículos 1º y 20 de la Constitución mexicana los cuales señalan que todas las personas en el territorio mexicano gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es

parte, siempre favoreciendo la protección más amplia a las personas prohibiendo todo tipo de discriminación motivada por razones de género. En adición, el artículo 10 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* y el artículo 16 de la *Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes* señalan que todas las personas que intervienen en el procedimiento recibirán el mismo trato y contarán con las mismas oportunidades.

Aunado a lo anterior, con fundamento en el control de convencionalidad los artículos 2, 6, 7 y 9 de la Convención Belém Do Pará y los artículos 2, 5 y 12 de la CEDAW reconocen la igualdad de la mujer ante la ley, y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. De lo cual se colige que, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar y juzgar con perspectiva de género para combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. También el artículo 2.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la prohibición de todo tipo de discriminación contra los niños y las niñas.

Además, el artículo 16 de la LNSIIPA añade la obligación del sistema de promover la igualdad

---

¹⁹ FUENTES, Dalia, *Op. Cit.*, p. 7.

sustantiva de los y las adolescentes en sus párrafos segundo y tercero:

Se entiende por igualdad sustantiva el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Las autoridades del sistema velarán por que todas las personas adolescentes sean atendidas teniendo en cuenta sus características, condiciones específicas y necesidades especiales a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos sobre la base de la igualdad sustantiva.

La base esta igualdad descansa sobre la equidad del ejercicio de derechos mediante la compensación de las asimetrías que pudieran encontrar las partes en el proceso.

También, la ley prevé ciertos artículos en los que establece derechos exclusivamente para las mujeres basados en la maternidad, por ejemplo:

- En su artículo 52 denominado equivalencia para el derecho a la salud, que las madres adolescentes y sus hijos o hijas que vivan con ellas en los centros de internamiento tienen derecho a servicios de salud de calidad.
- Además, el artículo 53 establece el derecho de las madres adolescentes a permanecer con sus hijos e hijos menores de tres años

mientras se encuentren en internamiento

- También el artículo 57 establece que las madres adolescentes tienen derecho a: **i)** a la maternidad, parto, puerperio y lactancia; **ii)** a permanecer con sus hijos o hijas y recibir insumos de las autoridades para su debido desarrollo; **iii)** acceder a los medios necesarios para que las madres pueden adoptar disposiciones respecto del cuidado de sus hijos o hijas; y **iv)** garantizar el ingreso de los hijos o hijas menores de 3 años cuando las madres adolescentes quieran mantener su custodia.

Por otro lado, el artículo 46 de la LNSIJPA referente a los derechos de las personas adolescentes privadas de libertad señala que tienen derecho a recibir asistencia médica y de tratamiento para la salud propia de su edad y sexo. En el caso de las mujeres debemos considerar la necesidad de contar con asistencia médica ginecológica y especializada privilegiando que sea brindada por médicos mujeres, tal como lo establece la *Ley Nacional de Ejecución Penal* y el artículo 57 de la LNSIJPA.

Si bien, durante la medida cautelar de internamiento preventivo y la ejecución de penas privativas de la libertad es cuando la Ley realiza diferenciaciones entre hombres y mujeres basándose principalmente en la maternidad y el derecho a la salud,

se debe considerar que la perspectiva de género es mucho más amplia. Enunciando el artículo 34 de la LNSIJPA: los derechos de las personas adolescentes previstos en la ley son de carácter enunciativo más no limitativos pues deberán de ser interpretados de conformidad con las leyes nacionales e internacionales de las que el Estado mexicano sea parte.

Por lo anterior, es obligación de las autoridades del Estado de garantizar la aplicación de una perspectiva de género en la integralidad el sistema de justicia penal para adolescentes.

«... el artículo 46 de la LNSIJPA referente a los derechos de las personas adolescentes privadas de libertad señala que tienen derecho a recibir asistencia médica y de tratamiento para la salud propia de su edad y sexo. En el caso de las mujeres debemos considerar la necesidad de contar con asistencia médica ginecológica y especializada privilegiando que sea brindada por médicos mujeres, tal como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 57 de la LNSIJPA».

---

²⁰ NÚÑEZ, Lucía, *El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión punitiva*, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, México 2018, p. 12.

IV. La aplicación de la perspectiva de género en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Cabe resaltar que cuando hablamos de la justicia penal se tiene que tomar en consideración que el derecho penal es la herramienta más violenta del Estado, debido que a través de este el Estado utiliza su capacidad coercitiva de imponer penas, restringiendo derechos de manera justificada como la libertad personal y de tránsito de las personas con fundamento en la ley penal.

Además, se debe prestar atención a la creación y funcionamiento de la ley penal, pues esta suele reproducir ejes discursivos de comportamiento que refieren lo que se considera normal y corresponde a los sexos, lo anterior debido a que el derecho se construye desde visiones hetero-normativas y binarias, lo que NÚÑEZ llama coordenadas de subjetización de género²⁰. Lo previamente señalado bajo la consideración de que el derecho penal es una construcción social y cultural es producto de relaciones sociales que cambian según el tiempo y el lugar²¹ y que ha sido producido por grupos de poder y resistencia²².

No obstante, parafraseando a Alda FACIO, el derecho penal no solo

²¹ *Ibidem*, p. 21.

²² *Ibidem*, p. 29.

debe ser utilizado como medio coercitivo para sancionar las conductas tipificadas en los códigos penales, también debe contribuir a la construcción de políticas criminales y de prevención que se centre en erradicar el origen de los delitos. En este sentido, casi todos los estudios sobre los efectos de determinadas leyes o políticas olvidan los efectos que tienen en cada sexo; así se vuelve imposible identificar cuáles son los problemas de origen²³.

Si bien, más del 90% de las personas inmersas en el sistema integral de justicia penal para adolescentes son hombres, esto ha causado que las realidades y necesidades de las mujeres sea ignorada, creando un sistema de justicia para adolescentes adroncentrista, esto quiere decir creado y desarrollado desde las situaciones y realidades de los adolescentes hombres. Como menciona Anna BERGA:

... incorporar la perspectiva de género significa entender que una perspectiva de género aplicada al estudio de la juventud no significa únicamente estudiar o visibilizar a las mujeres, sino analizar hasta qué

punto los procesos de adaptación y respuesta de los y las jóvenes frente a las condiciones materiales de sus vidas están condicionadas, en buena medida, por su socialización diferencial de género²⁴.

En este sentido y tomando en cuenta los mínimos números de mujeres dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, las adolescentes cargan consigo estereotipos como que las mujeres son buenas y pertenecen al espacio privado donde deben de ser protegidas. Al ser investigadas o sancionadas por la comisión de un delito no solo son trasgresoras de las normas jurídicas, también de las normas sociales, ya que no solo infringen las leyes sino los roles que deberían de seguir según su género, lo cual genera un doble estigma en las mujeres en el sistema²⁵.

Es importante tomar en cuenta que como menciona el Diagnóstico de necesidades de las adolescentes en conflicto con la ley del Instituto Nacional de Mujer, la población de adolescentes es un reflejo de la población general incluyendo sus problemáticas en materia de violencia, salud y delincuencia. Las mujeres

---

²³ FACIO, Alda, *Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal*, Costa Rica 1991, p. 101.

²⁴ BERGA, Anna, «Los estudios sobre la juventud y la perspectiva de

género», *Revista sobre los Estudios de la Juventud*, número 110, España 2015, p. 195.

²⁵ AZAOLA, Elena, «Diagnósticos de los y las adolescentes que cometen delitos graves en México», UNICEF, México 2016.

adolescentes, por las condiciones que enfrentan, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en el momento de enfrentar al sistema de justicia penal, especialmente en la etapa de ejecución, ya que como en el caso del sistema para adultos, la poca proporción de mujeres lleva a que el estado no las tome en cuenta²⁶.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un informe sobre la situación de las personas adolescentes en centros de internamiento en 2014, en dicho informe documentó que las mujeres adolescentes privadas de su libertad no contaban con los espacios destinados exclusivamente a mujeres —tal como lo establece la ley—, carecen de instalaciones adecuadas, restringiéndoseles el acceso a las actividades o servicios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse con los hombres áreas como las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios, áreas deportivas y médica²⁷.

También, cabe resaltar que la Encuesta Nacional de Adolescentes en

el Sistema de Justicia Penal de 2017 recopiló información que señala que el 46.7% de las mujeres adolescentes en el sistema de justicia penal han estado embarazadas, de las cuales el 18.6% abortó, que el 28.1% en el sistema sean madres²⁸.

«...tomando en cuenta los mínimos números de mujeres dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, las adolescentes cargan consigo estereotipos como que las mujeres son buenas y pertenecen al espacio privado donde deben de ser protegidas. Al ser investigadas o sancionadas por la comisión de un delito no solo son trasgresoras de las normas jurídicas, también de las normas sociales, ya que no solo infringen las leyes sino los roles que deberían de seguir según su género, lo cual genera un doble estigma en las mujeres en el sistema.»

---

²⁶ INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, *Diagnóstico de necesidades de las mujeres adolescentes en conflicto con la ley que contenga propuestas para enriquecer el Programa personalizado de ejecución de la medida y proporcionar la atención integral de mujeres adolescentes en conflicto con la ley*, México 2016, p. 7.

²⁷ COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos*

sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana, México 2014.

²⁸ La población objeto de estudio y unidad de observación fueron personas adolescentes de 12 a 17 años que se encontraban en el sistema integral de justicia penal para adolescentes y que tuvieran como medida cautelar el

Por otro lado, el Observatorio Libertad en Comunidad ha recopilado cifras realizadas a través de solicitudes de acceso a la información que demuestran el abuso por parte del Poder Judicial de los Estados en la imposición de la medida cautelar de internamiento preventivo tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, estados como Zacatecas²⁹ de 2015 a 2018 le han impuesto la medida cautelar de internamiento preventivo al 92.7% de las mujeres, Guerrero³⁰ al 83.3% y Tabasco³¹ al 78.9%; contraviniendo el principio de excepcionalidad del sistema. Además, la mayoría de las adolescentes en el sistema se encuentra investigado en el mismo por la comisión de delitos menores, por ejemplo en la Ciudad de México³² el 34.1% de las mujeres con internamiento preventivo están siendo investigadas por el delito de robo simple y el 24.4% por el delito de robo a transeúnte.

«Es preocupante que hay poderes judiciales que no cuentan con información diferenciada por sexo de personas adolescentes sentenciadas; también, que la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal de 2017 solo diferenció a las mujeres por su condición de madre, pero no señaló el número de adolescentes mujeres privadas de libertad, el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual, el acceso a servicios de salud adecuados para las mujeres o cuántas de ellas viven en los centros de internamiento con sus hijos o hijas».

---

internamiento preventivo o que se les hubiera dictado una medida de sanción privativa o no privativa de la libertad por la comisión de un delito en el fuero común o del fuero federal.

²⁹ Respuesta a la solicitud de información con el folio 00977518 del Poder Judicial del estado de Zacatecas.

³⁰ Respuesta a la solicitud de información con el folio 00677418 del Poder Judicial del estado de Guerrero.

³¹ Respuesta a la solicitud de información con el folio 01423718 del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

³² Respuesta a la solicitud de información con el folio 6000000254118 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Conclusión

En alusión a lo previamente señalado, una debida perspectiva de género en el sistema integral de justicia penal para adolescentes debería incluir lo siguiente:

Primero, los programas de prevención y las políticas públicas que devengan de estos deben de considerar a las mujeres en el diseño de políticas públicas. Una buena pauta de estas medidas son el trabajo de los Centros de Justicia para la Mujer en Yucatán que cuentan con programas de empoderamiento para mujeres adolescentes con el fin de prevenir la violencia de género y en el noviazgo³³; un mal ejemplo es la promoción de programas de empleo destinados exclusivamente a mujeres, en los que se les enseña a ser niñeras, pues este programa reproduce la idea de que las personas capacitadas para cuidar a los y las hijas son las mujeres³⁴.

Segundo, los principios rectores del sistema de justicia penal para adolescentes deben de analizarse y aplicarse con perspectiva de género, por ejemplo:

- Para el criterio de excepcionalidad se debe de analizar la necesidad y razonabilidad de imponer una medida cautelar de internamiento preventivo a las

mujeres analizando las opciones en libertad que el sistema ofrece, sobre todo cuando las mujeres adolescentes son madres o están embarazadas, recordando que la libertad siempre se debe de beneficiar.

- En referencia a la especialización, esta no debe de realizarse solo en el sistema integral de justicia penal para adolescentes y sistema penal acusatorio, también debe de capacitarse a todos las personas que intervienen en el sistema (policías, ministerios públicos, jueces y juezas, defensores, las unidades de medidas cautelares, las autoridades de mecanismos alternativos y las autoridades de ejecución de medidas) en adolescencia y género, con el fin de eliminar la propiciación de estereotipos de género y lograr que las autoridades cuenten con una capacitación adecuada.
- El principio de integralidad señala que las autoridades del sistema tienen que trabajar coordinadas y en conjunto, para establecer una debida perspectiva de género en el sistema de justicia para adolescentes se deben de implementar un plan de acción en dónde cada autoridad identifique como reconocer las situaciones en

---

³³ Respuesta a la solicitud de información del 19 de septiembre de 2018 por PRODEMEFA.

³⁴ Respuesta a la solicitud de información con el folio 00947118 de la Fiscalía General del estado de Yucatán.

los que existe una diferenciación por razones de género y como atenderla de manera conjunta y coordinada, con el fin de que esta perdure.

Tercero, las autoridades deben mejorar la calidad de la información estadística sobre la población de mujeres adolescentes en conflicto con la ley penal conforme lo establece la LNSIJPA en su artículo 78 sobre el sistema nacional de estadística del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual establece que las fiscalías, defensorías, tribunales, las instituciones de seguridad pública, las unidades de medidas cautelares y los órganos de mecanismos alternativos deben recopilar y sistematizar información del sistema. Lo anterior, es necesario que se haga con perspectiva de género para atender las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil, sin invisibilizar a las mujeres. Es preocupante que hay poderes judiciales que no cuentan con información diferenciada por sexo de personas adolescentes sentenciadas; también, que la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal de 2017 solo diferenció a las mujeres por su condición de madre, pero no señaló el número de adolescentes mujeres privadas de libertad, el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual, el acceso a servicios de salud adecuados para las mujeres o cuántas

de ellas viven en los centros de internamiento con sus hijos o hijas.

Cuarto, garantizar la participación de las mujeres adolescentes y sus familias en los programas de prevención, su proceso penal, en la etapa de ejecución y la recolección de información sobre las situaciones y retos que viven cada día en el sistema.

Quinto, fortalecimiento y diversificación de los programas en los centros de reinserción social, para que estos no se limiten a actividades que son tradicionalmente dirigidas a las mujeres como corte y confección, peluquería y cocina, ampliando la gama de actividades que les garanticen mejores actividades laborales para su futuro.

Finalmente, es necesario que las autoridades a nivel local y federal etiqueten un presupuesto para la implementación de la perspectiva de género en el sistema con el fin de garantizar su debida aplicación.

En conclusión, las medidas que deben de tomar las personas que participan en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes deben de analizar los estereotipos de género que afectan a las adolescentes y que se convierten en violencia contra la mujer y cuáles son las opciones con las que cuentan para prevenirla, erradicarla y en su caso sancionarla. Las mencionadas anteriormente son enunciativas, pues la perspectiva de

género trasciende en los servicios sociales, el juzgar con perspectiva de género, la distribución del espacio público, entre otros.

«... las medidas que deben de tomar las personas que participan en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes deben de analizar los estereotipos de género que afectan a las adolescentes y que se convierten en violencia contra la mujer y cuáles son las opciones con las que cuentan para prevenirla, erradicarla y en su caso sancionarla. Las mencionadas anteriormente son enunciativas, pues la perspectiva de género trasciende en los servicios sociales, el juzgar con perspectiva de género, la distribución del espacio público, entre otros».

Fuentes consultadas

Bibliografía

AZAOLA, Elena, «Diagnósticos de los y las adolescentes que cometen delitos graves en México», UNICEF, México 2016.

BECERRA, Antonio, *Transexualidad: La Búsqueda de una Identidad*, Ediciones Díaz de Santos, España 2003.

BERGA, Anna, «Los estudios sobre la juventud y la perspectiva de género», *Revista sobre los Estudios de la Juventud*, número 110, España 2015.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas*, Estados Unidos de América 2011.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, *Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana*, México 2014.

COOK, Rebecca y CUSAK, Simone, *Estereotipos de género: perspectivas legales transnacionales*, Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos de América 2009.

FACIO, Alda, *Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal*, Costa Rica 1991.

FUENTES, Dalia, *Metodología para el Análisis de las decisiones jurisdiccionales desde la perspectiva de género*, Equis: Justicia para las mujeres, México 2017.

HUERTAS DÍAZ, Omar, MORALES CHINOME, Iván Ricardo, «El

sistema de responsabilidad penal para adolescentes: la expansión de la punibilidad en el neopunitivismo colombiano», Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, *Revista Científica Guillermo de Ockham*, (Julio-Diciembre 2013), disponible en: [\[http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105329737005\]](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105329737005), consultada en: 2019-04-15.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, *Comunicado de prensa núm. 398/2018: Resultados de la primera encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal*, 30 de agosto de 2018, México 2018.

_____, *Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2017*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía — INEGI, México 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, *Diagnóstico de necesidades de las mujeres adolescentes en conflicto con la ley que contenga propuestas para enriquecer el Programa personalizado de ejecución de la medida y proporcionar la atención integral de mujeres adolescentes en conflicto con la ley*, México 2016.

NÚÑEZ, Lucía, *El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión punitiva*, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, México 2018.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *Protocolo para juzgar con perspectiva de género*, México 2015.

Legislación Nacional

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Legislación Internacional

Convención sobre los Derechos del Niño.

CORTE IDH, Caso Mendoza y otros vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 14 de mayo de 2013, Serie C No. 260.

_____, Caso Furlan y familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246.

_____, Caso «Instituto de Reeducción del Menor» vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr.228.